

La falta de profesionales: un problema real en el inicio del curso en las residencias



ACALERTE EXPLICA QUE NO HAY CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EL POSIBLE INCREMENTO DE BAJAS Y PIDE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVEN EN RESIDENCIAS O QUE RECIBEN SERVICIO EN CENTROS

POR ESTHER DUQUE

VALLADOLID

La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia, Acalerte, pide a la administración pública medidas que garantice la atención a las personas más vulnerables ante la Covid, tanto las que viven en residencias como los que reciben Servicios Sociales en su hogar o acuden a centros de día.

“Necesitamos que se establezca un plan para cubrir las bajas porque los pro-

blemas de contratación en el sector están ya a la orden del día y con la llegada de los rebrotes se puede agudizar y no se puede dejar sin cubrir vacante alguna”, explica Diego Juez, presidente de Acalerte.

La prioridad: que el Sistema de Salud asuma la realización de PCR a los profesionales del sector social como ocurre con el sanitario o los temporeros ahora en vendimia. Test que deben realizarse de forma prioritaria y con resultados ágiles que permitan confirmar o negativizar

el virus y así garantizar que una persona pueda incorporarse a su puesto con seguridad y garantías.

Por otro lado, solicitan que se agilicen las homologaciones de los títulos de profesionales extranjeros que desean venir a trabajar en España y se facilite que las personas en último año de estudios o que estudia FP especializado en el sector su incorporación al mercado laboral como medida extraordinaria. Hay que recordar que tanto en los centros residenciales se considera ‘brote’ cuando hay

un caso en estudio tanto si es trabajador o persona usuaria, lo que obliga a aislar a los compañeros de residencia y profesionales con los que ha tenido contacto el posible positivo con lo que ello implica para la vida del centro.

FINANCIACIÓN. La Federación Castellano Leonesa Residencias Tercera Edad (Acalerte) quiere también reivindicar el papel y la labor realizada por los centros residenciales durante la crisis

provocada por la pandemia, a su juicio atacados en ocasiones sin conocer cual es su verdadera realidad. «Nosotros hemos sido la parte más débil del sistema, hemos sufrido una pandemia en la que ahora ya no hay excusa. Hay que tener una cosa muy en cuenta: nosotros nos dedicamos a cuidar no a curar», subraya Diego Juez que demanda una financiación justa y necesaria para el sector.

Según los datos que maneja Acalerte existen diferencias de precios a lo largo del territorio nacional con variaciones que llegan hasta el 40%, el precio medio de una plaza se sitúa sobre los 1.777 € y la media en Castilla y León apenas cubre 1.350 € o 1.450 euros (recientemente hemos visto una noticia como no se cubrían plazas públicas por 2.050 € en Navarra, cuando en Castilla y León el precio de asistido ronda 1.300 € (44 €/día). “Con estos precios se hacen milagros gracias a la capacidad de trabajo de nuestras gentes” finaliza Juez.

“El sector de la Dependencia no sólo se preocupa por las personas usuarias, sino por toda la población en general, sobre todo en el medio rural donde la generación de empleo es básica y el mantenimiento de los mismos es vital en un momento donde hay centros que plantean su viabilidad. Hay que garantizar el futuro de la atención de todos los ciudadanos de Castilla y León”, finaliza el presidente de Acalerte.